

DERECHOS AGONIZANTES

DROITS À L'AGONIE

AGONIZING RIGHTS

JEAN-MICHEL BELORGEY¹

Ex Presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales

Consejero de Estado Honorario

*Parlamentario honorario y ex presidente de la Comisión de asuntos culturales,
familiares y sociales de la Asamblea Nacional francesa*

Cómo citar este trabajo: Belorgey, J.M. (2025). Derechos agonizantes, *Lex Social*, Revista De Derechos Sociales, 15 (2), pp. 1-17. <https://doi.org/10.46661/lexsocial.12102>

RESUMEN

El autor reflexiona sobre la situación agonizante en la que se encuentran inmersos en nuestros días algunos derechos, especialmente los sociales y los relativos a la protección internacional. Dicha situación todavía es más preocupante si se tienen en cuenta recientes prácticas deshonestas vividas en el seno de las instancias internacionales más emblemáticas que se ocupan de la garantía de tales derechos (incluido el Comité Europeo de Derechos Sociales). Ahora bien, los peligros de fragilización, e incluso de aniquilación, afectan al conjunto de derechos, pues los derechos forman parte de un todo. En efecto, todos los derechos (también los civiles y políticos) se ven sometidos a una especie de principio de contagio a causa de

¹ Traducción del original francés por Luis Jimena Quesada, Catedrático Derecho Constitucional y Miembro del IDH. (Universitat de València).

corrientes pensamiento hostiles al Estado de Derecho como exigencia axiológica de orden internacional. En última instancia, dicho contagio tiene una proyección negativa en el ámbito de la acción legislativa, gubernamental y judicial bajo la apariencia y el pretexto de la lucha contra la delincuencia y otros riesgos globales, afectando a personas en situaciones de vulnerabilidad (infancia, solicitantes de asilo, etc.).

PALABRAS CLAVE: Derechos sociales, *soft law*, protección internacional, personas vulnerables, Estado de Derecho, contagio ideológico, desafíos globales.

ABSTRACT

The author reflects on the agonizing situation in which some rights are currently immersed, especially social rights and those relating to international protection. This situation is all the more worrying in the light of recent dishonest practices within the most emblematic international bodies responsible for guaranteeing these rights (including the European Committee of Social Rights). However, the dangers of weakening, or even annihilation, affect all rights, because rights are part of a whole. Indeed, all rights (including civil and political rights) are subject to a kind of contagion principle due to currents of thought hostile to the rule of law as an axiological requirement of the international order. Ultimately, this contagion has a negative projection in the field of legislative, governmental and judicial action under the guise and pretext of the fight against crime and other global risks, affecting people in situations of vulnerability (children, asylum seekers, etc.).

KEYWORDS: Social rights, soft law, international protection, vulnerable people, rule of law, ideological contagion, global challenges

Es una cuestión de derechos, tal como reza una elocuente metáfora acerca de las esculturas africanas, y que sigue siendo pertinente después de medio siglo, puesto que hay diversas maneras de dar muerte: “*Las esculturas también mueren*”². No de todos los derechos. Aun así, los derechos, incluso los más recientes, forman parte de un todo, y su fragilización, o su exterminio, debilitan poco a poco, y luego descalifican este todo, incluso la noción misma de derecho. Para convencerse de ello, basta con meditar sobre el reciente y espectacular -si bien la emoción que suscitó se calmó rápidamente- cuestionamiento por un miembro del gobierno francés de la noción de *Estado de derecho*. Al parecer, no es la primera vez que un director de la DGSE [Dirección General de la

² Película de Alain Resnais, Chris Marker y Ghislain Cloquet, 1953, premio Jean Vigo 1954, cuya difusión estuvo prohibida hasta 1964.

Seguridad Exterior, el servicio secreto francés] expresa la misma opinión, y un antiguo secretario general del Consejo Constitucional se ha sumado recientemente a esta corriente de pensamiento en nombre de una hostilidad, en parte legítima pero en parte más ambigua, hacia el *gobierno de los jueces*. Esta postura va acompañada -el vínculo entre ambas preocupaciones no es evidente, pero es un clásico en el discurso de cierta corriente de pensamiento- de una advertencia contra los peligros de una invasión migratoria. Sea como fuere, cuesta creer que, al igual que en Estados Unidos, los veredictos judiciales por fraude fiscal, fraude electoral, corrupción o acoso sexual, por muy fundados que estén, no se vean ahora más o menos sistemáticamente expuestos al desmentido mediante maremos electorales, amnistías o convalidaciones legislativas.

Las dos categorías de derechos cuya agonía hay que señalar evidentemente en primer lugar son, por una parte, los derechos sociales y, por otra, los derechos que, ya sea por su fuente o por su alcance, son susceptibles de ser calificados de internacionales. Ahora bien, no cabe desconocer que un principio de contagio se ha revelado asimismo en otras categorías de derechos, en particular los derechos conocidos como libertades, si bien dicho concepto no ha tenido realmente nunca mucho sentido, si se utiliza para contraponer los derechos sociales a los derechos civiles y políticos, ya que unos y otros se condicionan mutuamente; como tampoco tiene sentido la noción de derechos fundamentales cuando su alcance se limita a los derechos civiles y políticos. Se trata del principio de un contagio que, como es natural, está surgiendo tanto en el ámbito de la normativa legislativa o reglamentaria como en el terreno de la jurisprudencia bajo la apariencia de la lucha contra el terrorismo, o más en general contra la delincuencia, y la defensa del orden público en el contexto particularmente agitado de los acontecimientos en Oriente Medio, conduciendo, entre otras cosas, a los jueces administrativos a validar las sanciones adoptadas por las instituciones universitarias contra los estudiantes que no comparten la opinión mayoritaria (o la mayoritariamente aceptada, e incluso impuesta). En otras palabras, aunque algunos jueces puedan, por razones muy diversas, inclinarse a adoptar una postura crítica frente a los otros poderes y a los individuos que los detentan, la gran mayoría tiende a seguir las orientaciones que el ejecutivo, la Cancillería y el espíritu de los tiempos, les incitan a adoptar³.

Entre los derechos y libertades, civiles y políticos, que conviene en calificarse de ordinarios, figuran el derecho de asociación y su extensión, el derecho de sindicación, así como la libertad de conciencia y de expresión pública de las convicciones religiosas, o antirreligiosas, que no cabe circunscribir al ámbito privado. A principios del siglo XX, la República Francesa, consciente de que corría el riesgo de verse doblemente asfixiada por una larga tradición de alianza entre la religión católica, el poder y, más en general, la

³ Lucien François, que fue miembro del Consejo de Estado y de la Corte de Arbitraje belgas, así como del Comité Europeo de Derechos Sociales, en su magistral obra *Le Cap des tempêtes, Essai de microscopie du droit*, Bruxelles, 2001, Bruylant, y algunas otras de sus obras, ya evocó ampliamente lo que está sucediendo con las fluctuaciones y convulsiones que nos ocupan. Lo reflejé en tal sentido en una reseña de sus trabajos, en 2005, bajo el título «Le droit mis à nu: Lucien François, parricide par clairvoyance», en *La Revue administrative*, n.º. 345, 2005, pp. 282-284, <https://www.jstor.org/stable/41543081>

reacción, por una parte, y por el auge del anticlericalismo, por otra, por no hablar del antisemitismo, sometió a votación una serie de leyes esenciales. Pero a partir de los años sesenta del siglo XX, esos textos revelaron su insuficiencia para dar cabida a la tercera religión del Libro, con la que la Francia imperial había mantenido durante mucho tiempo una relación que nada tenía que ver con el laicismo (ni, por lo demás, con la Iglesia católica en las colonias). De ahí la emergencia de un cierto discurso, tendente a dar una definición del laicismo que no tiene nada que ver con la de Jaurès, ni con la de los agnósticos humanistas, sino tendente a dar lugar -como reza el título de un libro escrito por un antiguo ministro- a la idea de *religión del laicismo*. De ahí el surgimiento extravagante de rencillas que se creían apaciguadas, no solamente a propósito del culto musulmán, sino también del culto católico (los belenes de Navidad), y el reciente cuestionamiento del Papa Francisco (unos meses antes de su fallecimiento) por un semanario bien conocido por sus adhesiones o alegatos políticos, porque unos años antes habría sugerido que el laicismo implicaba, pese a la libertad de prensa, el respeto de la esencia de las convicciones religiosas de los demás, a riesgo de perturbar el orden público.

Es sabido que la proliferación de derechos internacionales, de fuente y alcance internacionales, derivados de tratados de alcance universal o regional, dentro de los límites establecidos por el obstinado rechazo de unas pocas grandes potencias reacias a suscribirlos para tener las manos libres (y, al hacerlo confiesan también su convicción de que están por encima de la ley), solo ha contribuido moderadamente, o nada en absoluto, a algún avance real en las políticas o comportamientos favorables al respeto de cualquier categoría de derechos humanos. Como mucho, ha contribuido a la prosperidad de una clase de burócratas y asesores, algunos de los cuales han honrado sin duda al género humano, mientras otros, por el contrario, lo han llevado a la desesperación; miles de obras han dado buena cuenta de dicha perversión. El alcance de esta situación es perceptible desde hace varias décadas, cuando los dirigentes más virtuosos de las instituciones creadas se esfuerzan en vano en demostrar que están a la altura y son dignos de su misión, siendo escandalosamente vilipendiados por ello, mientras que incluso los Estados signatarios de los instrumentos en los que se basan para llevar a cabo esta misión se burlan de ellos para eludir las obligaciones que han aceptado y seguir una política exterior, o políticas de todo tipo inspiradas, en el mejor de los casos, por preocupaciones económicas imperialistas o por preocupaciones electorales, pero puede haber cosas peores; véase, sobre el particular, el balance de medio siglo de violaciones por parte de Israel, o por los Estados que trafican con armas (incluidos Estados Unidos y Francia, que no ha tenido empacho en buscar y encontrar salidas a este respecto en el Irán de los Mulá, el Iraq de Sadam Hussein, o la Siria de Bashar al-Assad). De todos los compromisos internacionales, uno que incontestablemente está llamado a desempeñar un papel importante en un mundo en el que florecen el odio y la persecución por motivos raciales, religiosos o políticos es, sin duda, la Convención de Ginebra sobre el Derecho de Asilo, que, con sus altibajos, se aplica más o menos desde hace tres cuartos de siglo por los Estados que la han suscrito. Desgraciadamente, hace ya demasiado tiempo que muchos Estados (por no hablar de los que, sin denunciar su adhesión, se niegan cínicamente a

asumir sus obligaciones) no aplican esta convención más que como una parodia; una burla que va escandalosamente acompañada de una estrategia de descalificación, a través de diversos procedimientos, de los solicitantes de protección⁴.

Por lo que respecta a los derechos sociales, en las últimas décadas se ha instaurado un verdadero clima genocida, no sólo en algunos Estados, sino también en varios foros regionales, en particular en Europa, donde, tras la Segunda Guerra Mundial, se crearon dos instituciones al mismo tiempo que otras con objetivos diferentes o un campo de acción más ancho (como la OCDE): la Comunidad Económica, hoy Unión Europea (el título anterior estaba menos cargado de usurpaciones), y el Consejo de Europa. En la primera institución, como nos dio a entender su título (pero la tendencia original no hizo sino aumentar cuando cambió de nombre a raíz del auge del neoliberalismo y de la adhesión a éste de algunos de sus dirigentes, entre ellos Jacques Delors, que imaginábamos inspirados por otras ideas), es la economía la que, aunque se intente ocultar el carácter exclusivo de las preocupaciones de este orden, constituye la fuerza motriz; y todo ello bajo el signo de un entendimiento que no tiene nada que ver con el que surgió tras la Segunda Guerra Mundial. A la segunda institución debemos en el ámbito de intervención por el que se orientó, los derechos humanos, una obra considerable y la instauración de dos instrumentos: el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que entró en vigor en 1953, y la Carta Social Europea, firmada en 1961 y revisada en 1996; esta distinción entre derechos civiles y políticos y derechos sociales, y el retraso que se verificó en el enunciado de las normas aplicables a los derechos sociales, no estaban evidentemente justificados, sino que respondían, y siguen respondiendo (y en cierto modo, una vez más, con más fuerza si cabe) a la representación del mundo por parte de dinastías de juristas y responsables políticos. Posteriormente se adoptaron otros instrumentos, cuya proliferación ha contribuido en gran medida a debilitar las posibilidades de razonar sobre los derechos humanos como un todo indivisible. Sin embargo, otro acontecimiento sobre el que no se han ponderado a largo plazo los riesgos que entrañaba para el futuro fue la proclamación en 2000 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a la que el Tratado de Lisboa dio el mismo alcance que a los Tratados de la Unión, pero cuyo título está viciado en sí mismo por una doble usurpación:

- En primer lugar, si bien reproduce más o menos las disposiciones del Convenio Europeo de 1950 en materia de derechos civiles y políticos, no puede predicarse lo mismo con respecto a las disposiciones de la Carta Social Europea, algunas de las cuales sólo reproduce de forma muy aproximada, y otras nada en absoluto;

- En segundo lugar, se entiende que los derechos fundamentales enunciados, incluso tras una poda de los derechos sociales, no merecen en absoluto esta calificación, puesto que una de las definiciones plausibles de los derechos fundamentales es su fuente, de carácter constitucional o para-constitucional, o al menos, por ambigua que sea esta

⁴ Véase Belorgey, J.M. *Le droit d'asile*, Librairie de droit et de jurisprudence, Paris, 1ª ed, 2013, 2ª ed. 2016.

noción en la jerga del Consejo Constitucional francés, de *alcance* constitucional (“*portée constitutionnelle*”). Lo cual implica la posibilidad de requerir, a partir del texto de referencia, su aplicación, en particular ante un juez (en los países que lo han intentado, ciertamente no ha sido fácil); mientras que la Carta excluye fríamente tal planteamiento en una oscura redacción, debida a la colaboración entre los negociadores británicos y el Sr. Giscard d'Estaing...

Sin embargo, tras la introducción en la Carta Social Europea de la posibilidad de presentar reclamaciones colectivas ante su órgano de control, el Comité Europeo de Derechos Sociales, contra los Estados que no cumplan las obligaciones previstas por la Carta y que hayan sido aceptadas (se trata de un sistema de aceptación con opciones o “a la carta”), fue muy notable el auge de la aplicación de facto de los derechos proclamados a costa de una declaración de incumplimiento por parte de los Estados infractores. Ahora bien, dicho auge ha durado apenas tres décadas. Poco a poco ha mediado una suerte de conjuración por parte de una serie de Estados, luego de la Unión Europea y, por último o al mismo tiempo, del propio Consejo de Europa, cuyas instancias en su conjunto, lejos de solidarizarse con la Carta Social y su órgano de garantía, han ido cultivando diversos tipos de negación de la legitimidad del sistema de la Carta, de su alcance y de la vocación del Comité Europeo de Derechos Sociales.

Es evidente que estos derechos han dejado de ser una preocupación importante de la Secretaría General del Consejo de Europa, a menos que se trate de apoyar la tendencia de ciertas Direcciones de la Institución a manifestar hostilidad hacia la idea de derechos, y una preferencia por la noción menos vinculante de *buenas prácticas*; esto se ha traducido en un cambio significativo en su organigrama, de modo que la Carta ha dejado de encuadrarse en la Dirección de Derechos Humanos, como ocurría anteriormente; y ello se ha traducido igualmente en una redistribución de los recursos, en particular a favor del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una institución a la vez bulímica y cada vez menos favorable a una comprensión exigente de las distintas categorías de derechos de las que se erige en buque insignia, y menos aún a cualquier consideración acerca de los derechos que se encuentran al margen de su ámbito competencial o acerca del papel desempeñado por ese órgano al que desde hace tiempo considera como de menor dignidad que es el Comité Europeo de Derechos Sociales. Pero ahora la soga se está apretando más, y aunque sigamos celebrando algunos aniversarios, los esfuerzos combinados de los adversarios dentro y fuera del dispositivo de la Carta están a punto de verse coronados por el éxito. Tanto más cuanto que poco a poco han conseguido introducir en el seno del Comité a meros comparsas que pronto completarán la obra de liquidación desde dentro, no solo del Consejo de Europa, sino del propio Comité.

De entrada, el Comité, cuyo número de sesiones al año, así como su duración, se han reducido considerablemente, y cuyos trabajos se han reorganizado de forma extraña, ya no está en condiciones -está claro, en cualquier caso, que no quiere estarlo- de sustanciar las reclamaciones colectivas que se le presentan en un plazo razonable. Se ha creado la costumbre de declarar, por una u otra razón, inadmisibles muchas de ellas; e incluso

cuando han sido declaradas admisibles, de rechazarlas; todo ello por motivos que la lectura más exigente de las disposiciones de la Carta hace ininteligibles para las organizaciones reclamantes, para los últimos comentaristas que no han sido atraídos por el bando de los exterminadores pese a los cambios que se han producido en el seno de la RACSE (Red Académica de la Carta Social Europea), y para la mayoría de miembros del actual Comité que no van a sus sesiones para hacer carrera y/o hacer triunfar sus prejuicios basados en el legitimismo de Estado y el neoliberalismo a ultranza. Pero, por si fuera poco, y como no es infrecuente en un clima de exaltación reaccionaria y de aplicación de diversos tipos de mecanismos más o menos encubiertos para mantener a raya a los disidentes, ahora están en escena algunos comportamientos francamente patológicos.

Una de las virtudes de una instancia como el Comité Europeo de Derechos Sociales radica en que, a diferencia de lo que ocurre en los tribunales franceses, los miembros que no hayan podido hacer prevalecer su posición en la decisión adoptada pueden emitir y publicar un voto particular discrepante. Se franqueó una nueva y delicada línea cuando se inventó un siniestro procedimiento de *recusación* contra un miembro, un procedimiento inexistente en el estatuto del Comité y que no podía existir en la recalcitrante y subrepticia forma adoptada, por falta de precedentes para el caso. El caso es que, durante mucho tiempo en el Consejo de Europa, sobre ciertos temas relativos a los derechos y libertades del personal, e incluso de los miembros de ciertos órganos, únicamente existían nociones muy aproximadas. Sobre este punto, el informe elaborado a petición de un Secretario General saliente por dos miembros del CEDS sobre lo que debería hacerse si se aplicaran las disposiciones de la Carta Social Europea al personal del Consejo fue, ante los ojos de sus autores, tirado a la papelera por un nuevo Director de Personal nombrado tras la sustitución del Secretario General, sin que ello perjudicara a su carrera.

Esto impera en las prácticas actuales en el vigente ambiente mafioso que reina en el Comité de Derechos Sociales, un modelo en transición, pero también se están poniendo las bases de un futuro aún más radicalmente radiante, con la ayuda del Consejo de Europa en su conjunto y de un Comité de Derechos Sociales de nuevo cuño que se está acomodando en Bruselas en el Parlamento Europeo o en el marco de reuniones deslocalizadas. Lo que -la renovación del vocabulario es un instrumento precioso en los combates para vencer a los adversarios, para orquestar ceses y sustituciones- se denomina ahora el *Pilar Europeo de Derechos Sociales*, que no puede considerarse otra cosa que la Carta validada por el Tratado de Lisboa, cuyas debilidades se han descrito, no es, en el mejor de los casos, más que una base embrionaria de derechos, de la que ni los tribunales nacionales (pocos de los cuales, es cierto, han decidido sacar partido de la Carta Social Europea⁵), ni el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pueden extraer gran cosa, aunque este tribunal haya podido, de vez en cuando, extraer del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales cosas que el

⁵ Véase Salcedo Beltrán, C., *Indemnizaciones por despido improcedente adecuadas, reparaciones apropiadas y su función disuasoria*, Albacete, 2024, Bomarzo.

TEDH de Estrasburgo no había extraído, o ya no extrae.

Ya en 2017, con motivo de una reunión en el Parlamento Europeo en Bruselas, se argumentó, con apoyo en un comentario autorizado sobre la Carta de los Derechos Fundamentales, que limitar la posibilidad de control judicial, en ausencia de Derecho positivo nacional o de la Unión, para verificar que se cumplieran las preocupaciones de la Carta, era conforme a las tradiciones nacionales; lo que dista mucho de ser exacto, argumentándose correlativamente que ello conducía a un callejón sin salida, a menos que se elaboraran nuevas directivas o reglamentos en algunos ámbitos sensibles, y a menos que las prioridades de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea fueran menos restrictivas en materia social. También se advirtió que muchos ámbitos de la legislación de la UE ya no estaban en consonancia con las exigencias de la Carta Social Europea, en particular en lo que se refiere a los derechos de las mujeres y los extranjeros, lo que, como señaló Luis Jimena Quesada en un libro reciente⁶, hacía imposible garantizar la protección contra las crisis de los más desfavorecidos; un tema igualmente familiar al profesor Stangos⁷, y que las decisiones del Comité de Derechos Sociales sobre la situación griega, que datan de la misma época, dejaron meridianamente claro⁸.

La forma en que el Comité Europeo de Derechos Sociales ha desestimado, en varias decisiones recientes todas con voto particular discrepante de la miembro aludida anteriormente, reclamaciones colectivas (una de la CFDT contra Francia, otra del *syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur* contra el mismo país, otra de tres sindicatos neerlandeses contra los Países Bajos y otra del Centro europeo de los derechos de las personas de etnia gitana contra Bélgica), demuestra que privan de todo alcance a:

- Las disposiciones de la Carta relativas al derecho de negociación colectiva, en la medida en que permiten excluir toda intervención sindical en las pequeñas y muy pequeñas empresas;
- Las disposiciones de la propia Carta relativas a las limitaciones que pueden o no imponerse al derecho de huelga;
- Las disposiciones de la Carta relativas asimismo a la discriminación y a la vivienda social.

En cada uno de estos ámbitos, sería deseable que los análisis, cuyo alcance es probable que sea concordante, si las reacciones observadas sirven de algo, fueran realizados por especialistas de lo que debe temerse como miembros de la vieja escuela, como el profesor Supiot, o el profesor Akandji-Kombé, si se confirma que la emoción creada en sus filas por veredictos y razonamientos impúdicos no puede ser compartida por los miembros de

⁶ Véase Jimena Quesada, L., *Social Rights and Policies in the European Union: New Challenges in a Context of Economic Crisis*, Valencia, 2016, Tirant lo Blanch.

⁷ Véase Stangos, P., *La fabrique de la jurisprudence sociale européenne. Les décisions 'réclamations collectives' du Comité Européen des Droits Sociaux*, Bruxelles, 2024, Bruylant.

⁸ Véase Belorgey, J. M., «La Charte européenne et la crise, considérations générales et exemple de la Grèce», en *Le travail humain au carrefour du droit et de la sociologie, Hommage au Professeur Nikitas Aliprantis*. Presses universitaires de Strasbourg, 2014, Strasbourg.

las nuevas generaciones de titulares de las mismas especialidades.

Hasta ahora solamente hemos hablado de derechos agonizantes, aunque se ha sugerido que lo que está en juego es, en cierto modo, la noción misma de Derecho, de sistema de regulación de la vida colectiva por el Derecho y de civilización por esa misma vía jurídica de las relaciones sociales en estado bruto. Pero la crisis del Derecho no puede vislumbrarse únicamente en una epidemia de agonías, muchas de ellas provocadas. Por muy fundada que sea la denuncia de la proliferación de textos normativos en los espacios nacionales e incluso a nivel internacional, la mayoría de los textos en cuestión nos hablan, cuando no de desmantelamiento, de desgarramiento del Derecho preexistente. De ello resulta que, en innumerables ámbitos, como el Derecho medioambiental, el de la bioética y el del uso de las tecnologías de la información y los macrodatos (*big data*), los datos recogidos se utilizan habitualmente en condiciones que atentan contra la privacidad y favorecen la manipulación política, así como la puesta en práctica de numerosas formas de discriminación. Sobre esta cuestión, basta con remitirse a la importante obra de Shoshana Zuboff, *La era del capitalismo de la vigilancia*, traducido en francés en 2019 y publicado en ediciones Zulma [N. del T.: obra traducida al español por Albino Santos y publicado en ediciones Paidós]⁹. A hacer frente a la multiplicación del número de lagunas jurídicas contribuyen tanto los derechos que han sido aniquilados como los derechos que nos negamos a dar a luz.

¿Debemos resignarnos a estas lagunas y renunciar a intentar remediarlas? Este parece ser a menudo el desequilibrio de las fuerzas en juego, tanto dentro como fuera del *mundo del derecho*, si es que este concepto sigue teniendo algún sentido y, en la medida en que lo tenga, si los defectos y contradicciones de los que este mundo es presa no permiten ya esperar una movilización fecunda; y si las fronteras entre el derecho y otros medios de intervención en la vida y el destino colectivos no se difuminan hasta tal punto que sea posible empantanarse en rituales y consentir aventuras sin puntos de referencia, y abdicar sin retorno posible. A este respecto, no pueden dejar de producirnos vértigo las declaraciones del Premio Nobel de Física Geoffrey Hinton sobre los callejones sin salida susceptibles de identificarse en la investigación sobre la seguridad de los dispositivos de inteligencia artificial, a menos que conduzcan a algo distinto de medidas adoptadas por empresas con ánimo de lucro, es decir, a una verdadera reglamentación gubernamental; en otras palabras, a un orden jurídico que no esté supeditado a los intereses de quienes lo promulgan o consienten en su promulgación.

⁹ Zuboff, S., *The Age of Surveillance Capitalism*, New York, 2019, PublicAffairs.

DROITS À L'AGONIE

Il en va des droits comme il s'est dit, selon une métaphore éloquente, et qui reste après un demi-siècle pertinente, car il y a plusieurs façons de mettre à mort, des sculptures africaines : « *Les sculptures meurent aussi.*¹⁰ » Pas de tous les droits. Encore que les droits, même les derniers nés, soient la partie d'un tout, et que leur fragilisation, ou leur extermination, en viennent peu à peu à fragiliser, puis disqualifier ce tout, et la notion même de droit ; il suffit, pour s'en convaincre, de méditer sur la récente, spectaculaire, mais l'émotion qu'elle a suscitée est vite retombée, mise en cause par un membre du gouvernement français de la notion d'*État de droit*. Ce qui, à ce qu'il semble, ne serait pas une première, un directeur de la DGSE ayant déjà naguère émis la même opinion, et un ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel ayant récemment rejoint ce courant de pensée au nom d'une hostilité, pour une part légitime, mais pour une autre, plus ambiguë, au *gouvernement des juges* ; cette position s'accompagnant, la liaison entre les deux préoccupations ne va pas de soi, mais est classique dans le discours d'une certaine pensée, d'une mise en garde contre les dangers d'une invasion migratoire. On peine, quoiqu'il en soit, à se convaincre que pas plus qu'aux États-Unis, les verdicts des juridictions pour faits de fraude fiscale, de fraude électorale, de corruption, de harcèlement sexuel, si fondés soient-ils, ne soient pas dès à présent, plus ou moins systématiquement, exposés à un démenti par des raz de marée électoraux, des amnisties, des validations législatives.

Les deux catégories de droits dont il faut d'évidence constater en premier lieu l'agonie sont d'une part les droits sociaux, d'autre part les droits de près ou de loin, soit à raison de leur source, soit à raison de leur portée, susceptibles d'être qualifiés d'internationaux. Non sans que, déjà, un début de contagion ne se révèle dans d'autres catégories de droits, en particulier les droits dits libertés, mais ce concept n'a jamais vraiment fait sens, si on l'emploie pour opposer les droits sociaux aux droits civils et politiques, dès lors qu'ils sont la condition les uns des autres ; pas plus que ne fait sens la notion de droits fondamentaux quand on en limite le champ aux droits civils et politiques. Un début de contagion qui, comme de juste, se fait jour tout aussi bien sur le terrain du droit législatif ou réglementaire que sur le terrain du droit jurisprudentiel sous couvert de lutte contre le terrorisme, ou plus généralement contre la délinquance, et de défense de l'ordre public dans le contexte particulièrement trouble des événements du Moyen Orient, conduisant, entre autres, des juges administratifs à valider des sanctions prises par des institutions universitaires contre des étudiants ne partageant pas l'opinion majoritaire (ou majoritairement acceptée, voire imposée) ; c'est dire que les juges, même si une partie

¹⁰ Film d'Alain Resnais, Chris Marker et Ghislain Cloquet, 1953, prix Jean Vigo 1954, dont la diffusion a été interdite jusqu'en 1964.

d'entre eux peut être pour des motifs très variables portée à adopter une position critique à l'égard des autres pouvoirs et des individus qui les détiennent, une grande majorité tend à suivre les orientations que l'exécutif, la Chancellerie, et l'air du temps, les incitent à adopter¹¹.

Faut-il au nombre des droits et libertés, civils et politiques, qu'on qualifiera pour l'occasion d'ordinaires, ranger le droit d'association et son prolongement, le droit syndical, ainsi que la liberté de conscience et d'expression publique, non pas confinée dans un espace privé, de ses convictions religieuses, ou anti-religieuses. La République française, consciente de l'étau dans lequel elle risquait de se voir doublement étouffée par une longue tradition d'alliance entre la religion catholique, le pouvoir et, plus généralement, la réaction, d'un côté, et par la montée de l'anticléricalisme de l'autre, sans parler de l'antisémitisme, a fait, au début du 20^e siècle, voter des textes essentiels. Mais dès les années 1960, ceux-ci ont révélé leur insuffisance pour loger la troisième religion du Livre, avec laquelle la France impériale avait durablement entretenu des rapports n'ayant rien à voir avec la laïcité (ni du coup, dans les colonies, avec l'église catholique). De là qu'un certain discours ait fini par apparaître, tendant à donner de la laïcité une définition sans rapport avec celle de Jaurès, ni avec celle des agnostiques humanistes, mais tendant à faire émerger – c'est le titre d'un livre écrit par un ancien ministre – l'idée de *religion de la laïcité*. D'où le surgissement extravagant de querelles qu'on croyaient apaisées, non seulement à propos du culte musulman, mais aussi à propos du culte catholique (les crèches de Noël), et la récente mise en cause du pape François (quelques mois avant son décès), par un hebdomadaire bien connu pour ses allégeances politiques, parce qu'il aurait quelques années plus tôt suggéré que la laïcité impliquait, nonobstant la liberté de la presse, le respect, à peine, à défaut, de perturber l'ordre public, du cœur des convictions religieuses d'autrui.

Des droits internationaux, de source et de portée internationales, issus de traités de champs universel ou régional, dans les limites que leur assigne le refus obstiné de quelques grandes puissances d'y souscrire en vue de garder les mains libres, et en confessant aussi, ce faisant, leur conviction d'être *au-dessus des lois*, on sait que leur prolifération, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, n'a que modérément ou pas du tout contribué à une véritable percée de politiques ou comportements favorables au respect de quelque espèce de droits de l'homme que ce soit. Tout au plus à la prospérité d'une classe de bureaucrates et de consultants, dont quelques-uns, certes, ont fait honneur au genre humain, mais d'autres, tout au contraire, ont poussé à en désespérer ; mille ouvrages ont rendu compte de cette perversion. On en mesure depuis plusieurs dizaines d'années l'étendue, quand c'est en vain que les plus vertueux des responsables des institutions mises en place

¹¹ Lucien François, ancien membre du Conseil d'État et de la Cour d'arbitrage belges, du Comité européen des droits sociaux aussi, a dans son magistral ouvrage, *Le Cap des tempêtes, Essai de microscopie du droit*, Bruxelles, 2001, Bruylant, et quelques autres œuvres, longuement évoqué ce qu'il en est des fluctuations ou convulsions de l'espèce ; j'ai donné une recension de ses travaux, en 2005, sous le titre « Le droit mis à nu : Lucien François, parricide par clairvoyance », dans *La Revue administrative*, n°. 345, 2005, pp. 282-284, <https://www.jstor.org/stable/41543081>

s'efforcent de se montrer dignes de leur mission, et sont scandaleusement vilipendés pour ce motif, tandis que même les États signataires des instruments sur le fondement desquels ils exercent cette mission les bafouent dans le but de se soustraire aux obligations qu'ils avaient acceptées, et de poursuivre une politique étrangère, ou des politiques de toutes natures qu'inspirent au mieux, mais il peut y avoir pire, des préoccupations économiques impérialistes ou des préoccupations électorales, voir à ce sujet ce qu'il en est d'un demi-siècle de violations par Israël, par les États marchands d'armes (dont les États-Unis et la France qui n'a durablement pas répugné à chercher et trouver à cet égard des débouchés dans l'Iran des mollahs, l'Irak de Saddam Hussein, la Syrie de Bachar el-Assad). De tous les engagements internationaux, l'un de ceux incontestablement appelés dans un monde où fleurissent les haines et les persécutions pour des motifs raciaux, religieux ou politiques, à jouer un rôle majeur, est incontestablement la convention de Genève relative au droit d'asile qui a, avec des hauts et des bas, été pendant trois quarts de siècle plus ou moins appliquée par les États y ayant adhéré ; il y a beau temps, hélas, que l'application de cette convention ne relève plus, dans beaucoup d'États (sans parler de ceux qui, sans pour autant dénoncer leur adhésion, refusent cyniquement d'en assumer les obligations) que de la parodie ; une parodie qui s'accompagne scandaleusement d'une stratégie de disqualification, par différents procédés, des demandeurs de protection¹².

Pour ce qui est des droits sociaux, c'est, de même depuis plusieurs dizaines d'années, un véritable climat génocidaire qui en est venu à s'établir, pas seulement dans un certain nombre d'États, mais dans plusieurs enceintes régionales et, singulièrement, dans celle de l'Europe où deux institutions ont, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, trouvé à s'édifier en même temps que d'autres d'objets différents, ou de champ plus englobant (telle l'OCDE) : la Communauté économique, devenue Union européenne (le premier intitulé était moins lourd d'usurpation), et le Conseil de l'Europe. De la première institution, telle qu'on était du fait de son titre porté à le comprendre, mais la tendance originelle n'a fait que s'accroître quand elle a changé de nom du fait de la montée en puissance du néo-libéralisme et de l'adhésion à celui-ci de quelques-uns de ses animateurs, dont Jacques Delors, qu'on imaginait porté par d'autres inspirations, c'est l'économie qui, quand bien même on s'emploie à occulter le caractère exclusif des préoccupations de cet ordre, qui constitue le ressort ; et cela sous le signe d'une compréhension qui n'a plus rien à voir avec celle qui s'était fait jour au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. À la seconde institution, on doit dans le domaine d'intervention qu'elle s'est choisie, les droits de l'homme, une œuvre considérable et l'établissement de deux instruments : la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entrée en vigueur en 1953, et la Charte sociale européenne, signée en 1961 et révisée en 1996 ; cette distinction entre droits civils et politiques et droits sociaux, et le retard observé dans l'énoncé des normes applicables aux droits sociaux n'allaient évidemment pas de soi, mais correspondaient, continue à correspondre, et d'une certaine manière, de nouveau, de plus fort, à la représentation du monde de dynasties de juristes

¹² Voir Belorgey, J.M. *Le droit d'asile*, Librairie de droit et de jurisprudence, Paris, 1^{ière} édition 2013, 2^{ième} édition 2016.

et de décideurs politiques ; d'autres instruments ont ultérieurement encore vu le jour, dont la multiplication n'a pas peu contribué à affaiblir les chances de raisonner sur les droits de l'homme comme sur un ensemble indivisible. Mais un autre événement dont on n'a pas durablement mesuré combien il comportait de risques pour l'avenir est, en 2000, l'établissement de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à laquelle le traité de Lisbonne a donné la même portée qu'aux traités sur l'Union, mais dont le titre est en soi entaché d'une double usurpation :

- D'abord, en ce que, si elle reproduit à peu près les énoncés de la Convention de sauvegarde de 1950 en matière de droits civils et politiques, il n'en va pas de même pour les énoncés de la Charte sociale européenne, dont elle ne reprend que très approximativement quelques énoncés, et d'autres pas du tout ;
- En ce que, ensuite, on comprend que les droits fondamentaux énoncés, serait-ce après un élagage des droits sociaux, ne méritent en aucun cas cette qualification car une des définitions plausibles des droits fondamentaux est leur source, d'ordre constitutionnel, ou para-constitutionnel, à tout le moins, pour ambiguë que soit cette notion dans le jargon du conseil constitutionnel français, de *portée* constitutionnelle ; ce qui implique la possibilité de requérir, sur le fondement du texte de référence, leur mise en œuvre, notamment devant un juge (dans les pays qui s'y sont essayés cela n'a, certes, pas été simple) ; alors que la Charte exclut froidement dans une rédaction obscure due à la collaboration entre les négociateurs britanniques et monsieur Giscard d'Estaing, une telle démarche...

Mais, le très remarquable essor pris, après l'introduction dans la Charte sociale européenne de la possibilité de former, devant son organe de contrôle, le Comité européen des droits sociaux, des réclamations collectives contre les États ne se conformant pas aux obligations prévues par la Charte acceptées par eux (il s'agit d'un système d'acceptation à options), de l'entrée dans les faits des droits proclamés au prix d'une déclaration de carence des États fautifs n'a guère duré que trois dizaines d'années, et une conjuration s'est progressivement fait jour du côté d'un certain nombre d'États, puis de l'Union européenne, enfin ou en même temps du Conseil de l'Europe lui-même, dont l'ensemble des instances, loin de se montrer solidaires de la Charte sociale et de son organe de régulation, ont progressivement cultivé différentes sortes de dénégations de la légitimité du système de la Charte, de la portée de celle-ci, de la vocation du comité européen des droits sociaux.

Ces droits ont manifestement cessé d'être une préoccupation majeure du Secrétariat général, à moins que ce ne soit pour appuyer la tendance de certaines directions de l'institution à manifester une hostilité à l'idée de droits, et une préférence pour celle, moins contraignante de *bons usages* ; ceci s'est traduit par une modification significative de l'organigramme, la Charte ne relevant plus, comme précédemment, de la direction des droits de l'homme ; également par une redistribution des moyens, notamment en faveur de la Cour européenne des droits de l'homme, institution tout à la fois boulimique, révélant un recrutement de moins en moins favorable à une compréhension exigeante des

différentes catégories de droits dont elle est la vestale, encore moins à une quelconque prise en considération soit des droits se situant à la marge de son champ de compétences, soit du rôle joué par cet organe de moindre dignité pour lequel elle a de longue date tenu le Comité européen des droits sociaux. Mais voilà que l'étau se resserre, et que dans le temps même où l'on persiste à célébrer quelques anniversaires, les efforts combinés des adversaires de l'intérieur et de l'extérieur du dispositif de la Charte sont en passe d'être couronnés de succès. D'autant que c'est au sein même du Comité qu'ils sont peu à peu parvenus à introduire des comparses qui achèveront bientôt, de l'intérieur, non plus seulement du Conseil de l'Europe, mais du comité lui-même, l'œuvre de liquidation.

D'abord, le Comité dont le nombre de sessions par an, comme la durée de celles-ci, ont significativement diminué, dont les travaux ont été étrangement réorganisés, ne parvient plus, il est clair, en toute hypothèse, qu'il n'y tient pas, à juger dans un temps raisonnable les réclamations collectives qui lui sont soumises. L'habitude s'est prise de déclarer, pour un motif ou pour un autre, nombre d'entre elles irrecevables, et quand bien même, elles auraient été déclarées recevables, de les rejeter, tout cela pour des motifs que la lecture la plus exigeante des dispositions de la Charte rendent inintelligibles pour les organisations requérantes, pour les derniers commentateurs que les redonnes intervenues au sein du RACSE n'ont pas ralliés au camp des exterminateurs, et la majorité des membres du Comité qui n'y siègent pas pour faire avancer leur carrière, et/ou faire triompher leurs préjugés à base de légitimisme d'État et de néo-libéralisme effréné. Mais, comme si cela ne suffisait pas, et comme cela n'est pas rare quand prévaut un climat d'exaltation réactionnaire et d'appesantissement de différentes sortes de mécanismes plus ou moins occultes de mise au pas des dissidents, voilà que s'en mêlent des comportements d'une tonalité carrément pathologique.

L'une des vertus d'une instance comme le Comité européen des droits sociaux est que, à la différence des pratiques ayant cours dans les juridictions françaises, les membres n'ayant pu faire prévaloir leur position dans la décision rendue, peuvent émettre et publier une opinion dissidente. Un nouveau pas a été franchi quand a été inventé, à l'encontre d'un membre, une sinistre procédure de *récusation* n'existant pas dans le statut du comité, et ne pouvant exister sous la forme récalcitrante et subreptice retenue, faute qu'existe où que ce soit un précédent de l'espèce. Mais on a de longue date, au Conseil de l'Europe, sur certains sujets en rapport avec les droits et libertés du personnel, et même des membres de certaines instances, que des notions très approximatives ; le rapport établi à la demande d'un secrétaire général sortant par deux membres du CEDS, sur ce qu'il conviendrait de faire si l'on appliquait aux personnels du Conseil les dispositions de la Charte sociale européenne a, sous les yeux de ses auteurs, été jeté à la poubelle par un nouveau directeur du personnel nommé après le remplacement du secrétaire général, et cela n'a pas nui à sa carrière.

Cela pour les pratiques en cours dans l'actuelle ambiance maffieuse prévalant au Comité des droits sociaux, modèle transitoire, mais on prépare aussi, avec le concours du Conseil de l'Europe en son entier, et du Comité des droits sociaux nouvelle manière en voie

d'installation, à Bruxelles, au Parlement européen ou dans le cadre de réunions délocalisées, un avenir plus radicalement radieux. Ce que – le renouvellement du vocabulaire est un précieux instrument dans les combats conduits pour venir à bout d'adversaires, orchestrer des dépositions et des restaurations – l'on désigne maintenant sous le nom de *Socle européen des droits sociaux*, dont on ne voit pas que ce soit autre chose que la Charte validée par le traité de Lisbonne, dont on a décrit les faiblesses, n'est au mieux qu'un socle que ne surmontent que des embryons de droits, dont on ne voit pas que ni les juridictions nationales (dont peu, il est vrai, se sont décidées à tirer profit de la Charte sociale européenne¹³), ni la Cour de justice de l'Union européenne puisse tirer grand-chose, même si cette cour à de temps à autres sut tirer de la convention de sauvegarde des choses que la CourEDH de Strasbourg n'avait pas, ou plus, tiré.

Dès 2017, lors d'une réunion au Parlement européen à Bruxelles, alors qu'il était avancé, sur le fondement d'un commentaire autorisé de la Charte des droits fondamentaux, que la limitation de la possibilité d'un contrôle juridictionnel, en l'absence de droit positif national ou de l'Union, pour vérifier qu'il était satisfait aux préoccupations de la Charte, était conforme aux traditions nationales, ce qui est loin d'être exact, il avait été avancé que cela conduisait à une impasse, à moins que soient élaborés dans quelques domaines sensibles de nouvelles directives ou de nouveaux règlements, et que les priorités de l'Agence de l'Union européenne pour les droits fondamentaux soient moins restrictives en matière sociale. Il avait été également observé que d'ores et déjà, de nombreux pans du droit de l'Union n'étaient pas conformes aux exigences de la Charte sociale européenne, notamment en matière de droits des femmes et des étrangers, ce qui, ainsi que l'avait relevé dans un récent livre Luis Jimena Quesada¹⁴, ne permettait en aucun cas de garantir aux plus défavorisés une protection contre les crises ; sujet également familier au professeur Stangos¹⁵, et que les décisions du Comité des droits sociaux sur la situation grecque, datant de la même époque, on fait apparaître de manière éclatante¹⁶.

De la façon dont le Comité européen des droits sociaux a, dans plusieurs décisions récentes, rejetant des réclamations collectives, l'une de la CFDT contre la France, une autre du syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur contre le même pays, une autre de trois syndicats néerlandais contre les Pays-Bas, une autre encore du centre européen pour les droits des Roms contre la Belgique, on retiendra qu'elles privent de toute portée:

-Les dispositions de la Charte relatives au droit de la négociation collective en ce qu'elles permettent d'exclure dans les petites et très petites entreprises toute

¹³ Voir Salcedo Beltrán, C., *Indemnizaciones por despido improcedente adecuadas, reparaciones apropiadas y su función disuasoria*, Albacete, 2024, Bomarzo.

¹⁴ Voir Jimena Quesada, L., *Social Rights and Policies in the European Union: New Challenges in a Context of Economic Crisis*, Valencia, 2016, Tirant lo Blanch.

¹⁵ Voir Stangos, P., *La fabrique de la jurisprudence sociale européenne. Les décisions 'réclamations collectives' du Comité Européen des Droits Sociaux*, Bruxelles, 2024, Bruylant.

¹⁶ Voir Belorgey, J. M., « La Charte européenne et la crise, considérations générales et exemple de la Grèce », en *Le travail humain au carrefour du droit et de la sociologie, Hommage au Professeur Nikitas Aliprantis*. Presses universitaires de Strasbourg, 2014, Strasbourg.

intervention syndicale ;

-Les dispositions de la même Charte relatives aux limitations qui peuvent ou non être apportées au droit de grève ;

-Les dispositions de la Charte encore relatives à la discrimination et au logement social.

Sur chacun de ces terrains, il serait souhaitable que des analyses, dont la portée risque d'être concordante, si on en croit les réactions observées, puissent être conduites par des spécialistes de ce qu'il faut craindre d'avoir à qualifier de *membres de l'ancienne école*, le professeur Supiot, le professeur Akandji-Kombé, s'il se confirme que l'émotion créée dans leurs rangs par des verdicts et des raisonnements impudiques ne peut être partagée par les membres de nouvelles générations de titulaires de mêmes spécialités.

Il n'a été jusqu'à présent question que de droits à l'agonie, quand bien même on a suggéré que c'est d'une certaine manière la notion même de droit, de système de régulation par le droit de la vie collective et de civilisation par ce procédé des rapports sociaux à l'état brut, qui est en cause. Mais la crise du droit n'est pas repérable seulement dans une épidémie d'agonies, pour une large part provoquées. Pour en un sens fondée que soit la dénonciation de la prolifération de textes normatifs dans les espaces nationaux et même au niveau international, la plupart des textes dont il s'agit sont des textes bavards, quand ce ne sont pas des textes de démantèlement, de mise en pièces du droit préexistant ; d'où il résulte que dans d'innombrables domaines, le droit de l'environnement, celui de la bioéthique, celui de l'utilisation de l'informatique et des big datas (les données recueillies sont couramment utilisées dans des conditions attentatoires à la vie privée et favorables à toutes les manipulations politiques, ainsi qu'à la mise en œuvre de nombreuses formes de discrimination). Il n'est à ce sujet que de se reporter à l'important ouvrage de Shoshana Zuboff, *L'Âge du capitalisme de surveillance*, traduit de l'américain en 2019 aux éditions Zulma¹⁷. Aux béances du droit qui tendent à se multiplier apportent tout ensemble leur contribution les droits mis à mort et les droits qu'on se refuse à mettre au monde.

A ces béances, faut-il se résigner et renoncer à porter remède, tel paraît souvent être le déséquilibre des forces en présence, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du *monde du droit*, si ce concept a un sens, et, dans la mesure où il en a un, si les failles, les contradictions dont ce monde est la proie ne permettent guère d'espérer une mobilisation féconde, et si encore les frontières entre le droit et d'autres procédés d'intervention sur la vie et le destin collectifs n'en viennent pas à se brouiller, à tel point que peuvent coexister un enlèvement dans des rites et un consentement à des aventures sans repères, et des abdications sans retour possible. On ne peut à cet égard qu'être saisi de vertige par les déclarations du prix Nobel de physique, Geoffrey Hinton, concernant les impasses repérables dans les recherches sur la sécurité des dispositifs d'intelligence artificielle, faute qu'elles débouchent sur autre chose que des mesures édictées par des entreprises en quête de profit,

¹⁷ Zuboff, S., *The Age of Surveillance Capitalism*, New York, 2019, PublicAffairs.

c'est-à-dire sur de véritables régulations gouvernementales ; autrement dit sur un droit qui ne soit pas inféodé aux intérêts de ceux qui l'édicte ou consentent à son édicte.

Bibliografía

Belorgey, J.M., « La Charte européenne et la crise, considérations générales et exemple de la Grèce », en *Le travail humain au carrefour du droit et de la sociologie, Hommage au Professeur Nikitas Aliprantis*. Presses universitaires de Strasbourg, 2014, Strasbourg.

Belorgey, J.M., « Le droit mis à nu : Lucien François, parricide par clairvoyance », *La Revue administrative*, n°. 345, 2005, pp. 282-284, <https://www.jstor.org/stable/41543081>

Belorgey, J.M. *Le droit d'asile*, Librairie de droit et de jurisprudence, Paris, 1^a ed. 2013, 2^a ed. 2016.

François, L., *Le Cap des tempêtes, Essai de microscopie du droit*, Bruxelles, 2001, Bruylant.

Jimena Quesada, L., *Social Rights and Policies in the European Union: New Challenges in a Context of Economic Crisis*, Valencia, 2016, Tirant lo Blanch.

Salcedo Beltrán, C., *Indemnizaciones por despido improcedente adecuadas, reparaciones apropiadas y su función disuasoria*, Albacete, 2024, Bomarzo.

Stangos, P., *La fabrique de la jurisprudence sociale européenne. Les décisions 'réclamations collectives' du Comité Européen des Droits Sociaux*, Bruxelles, 2024, Bruylant.

Zuboff, S., *The Age of Surveillance Capitalism*, New York, 2019, PublicAffairs.